

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 04 JUL 2019

AUTO No. _____.

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-021-2019-00187-01
DEMANDANTE:	NASLY ISABEL RIVAS Y OTROS
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO POR CADUCIDAD - CONFIRMA.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso apelación, propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio No. 891 del veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019), proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderada judicial, la señora Nasly Isabel Rivas y otros demandaron al Municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se declare a la demandada patrimonial y administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por la falla en la prestación del servicio de un agente de tránsito; en consecuencia pide que se condene a la demandada al pago de los perjuicios materiales y morales sufridos por los demandantes.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 891 del 24 de julio de 2019, el juez A – quo rechazo de plano la demanda al considerar que:

“...En ese sentido se tiene que la ley otorga un plazo máximo de dos (02) años para que se proceda a radicar la demanda respectiva, el cual de ser superado conllevará la decisión de rechazo por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad.

En el caso concreto se observa que los hechos en los cuales se afirma resultaron lesionada la Sra. Nasly Isabel Rivas, ocurrieron el 20 de mayo de 2014 lo que significa que el término bianual en referencia corrió hasta el 21 de mayo de 2016.

Dado que la demanda se formuló el 04 de mayo de 2018, se concluye que la misma caducó y, por lo tanto, procede su rechazo.



No obstante lo anterior, en razón a que en el plenario obra prueba sobre la actuación surtida ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos, es necesario indicar desde ya que la solicitud para la realización de la audiencia se formuló el 18 de diciembre de 2017, lo que permitiría insistir en la afirmación sobre la ocurrencia de caducidad en el asunto, por cuanto esa petición no tuvo el efecto de suspender el término bianual en mención.

Cabe agregar que la misma procuraduría señaló como causal de rechazo de la solicitud de conciliación extrajudicial, la caducidad que había operado en el particular, sucediendo esto mediante auto del 17 de enero de 2018, lo cual se confirmó el 31 de enero de la misma anualidad, cuando se profirió el auto No. 29 resolviendo el recurso de reposición presentado por la interesada..."

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada judicial de la parte demandante dentro del término establecido presentó recurso de apelación.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente que: "...Al momento de estudiar la demanda no se está contando que la prolongación del daño se dio el 17 de mayo de 2016, donde fue las últimas secuelas del hecho dañino y no desde el momento que ocurrió el accidente..."

V. CONSIDERACIONES:

5.1. RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 244 de la Ley 1437 regula el trámite del recurso de apelación contra autos y consagra lo siguiente:

"ARTÍCULO 244. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTOS. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en el transcurso de la misma.

De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta.

2. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.

3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.

4. Contra el auto que decide la apelación no procede ningún recurso".



Ahora bien, se verifica entonces que el recurso fue presentado dentro de la oportunidad legal y que no se corrió traslado secretarial del escrito de apelación a los demás sujetos procesales por cuanto aún no se encuentra trabada la litis.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Se debe revocar o confirmar la decisión del juez de primera instancia que determinó rechazar por caducidad el presente medio de control?

Para resolver el precitado problema jurídico, es pertinente realizar un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la caducidad en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y luego aplicarla al caso concreto.

• LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

El artículo 140 del CPACA consagra el medio de control de Reparación Directa, anotando que:

"ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que la acusación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño."

El literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en relación con la oportunidad para presentar la demanda del medio de reparación directa, prevé:

"Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el

proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. (...)” (subraya y negrilla fuera de texto).

Por su parte, el artículo 169 del CPACA indica cuales son los casos en los cuales será procedente el rechazo de la demanda precisando lo siguiente:

“(...) Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad. (Subraya la Sala)
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.
3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. (...)”

Respecto de la caducidad de las acciones, se debe decir que esta institución jurídica se estableció por el Legislador como una forma de lograr la seguridad jurídica que propende por el interés general, la cual es de obligatoria observación y aplicación por el juzgador al momento de admitir la demanda.

Respecto a la caducidad en el medio de control de Reparación Directa, en reciente jurisprudencia el Consejo de Estado¹ ha manifestado lo siguiente:

“...De la caducidad del medio de control de Reparación Directa.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Es así como este fenómeno procesal opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva. En referencia a esta institución el Consejo de Estado ha argüido²:

En la caducidad deben concurrir dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Dicho término está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no. Es por lo anterior que no puede ser materia de convención antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, improrrogable (...).

La regla general indica que el término de caducidad se comienza a contabilizar a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del

¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera- Subsección A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN del 21 de junio de 2019. Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01197-01 (61157). Actor: HERNÁN RINCON CASTRO Y OTROS. Demandado: ECOPETROL. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE Reparación Directa.

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 16207, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante, en otros casos, no es tan evidente la fecha cierta a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo de dos años previsto en la ley. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad al hecho dañino que lo causa, es decir, la causa lesiva no es contemporánea con el daño, razón por la cual se impone a fortiori acoger una interpretación flexible—fundada en el principio pro damato de la norma— que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial. Si se considera que el daño es el presupuesto primordial para la procedencia de la acción de reparación directa, es obvio considerar que el plazo de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del "acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa", sino excepcionalmente a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, cuando i) la víctima se percató de su ocurrencia, o ii) desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.

(...)

Los efectos en el tiempo del hecho dañoso no cambian la regla general a partir de la cual empieza a contabilizarse el término para acudir a la justicia, ya que, según esta Corporación, "no puede confundirse la causación del daño con la prolongación del mismo, pues muy diferente es que el daño se genere por una permanente acción u omisión de la entidad y otra cosa es que el daño permanezca en el tiempo o se agrave por la falta de remedio oportuno". Así las cosas, el hecho de que el daño se agrave con el tiempo no quiere decir que este tenga el carácter de continuado o de tracto sucesivo⁴, ya que, siguiendo lo dicho por esta la Corporación, ello implicaría atentar contra la seguridad jurídica al prolongar indefinidamente el término para presentar la demanda:

(...)

De acuerdo con lo anterior, para efectos de contabilizar la caducidad, lo relevante es la causa del daño -¿qué produjo el daño?- y no las consecuencias del mismo. Así, cuando el daño es de ejecución instantánea, esto es, se consume en un solo evento, incluso si se prolongan sus consecuencias, el término de caducidad coincide con el acaecimiento de la causa del daño y se aplica la regla general que prescribe que el término de caducidad se contabiliza al día siguiente del hecho dañino, en tanto que si el hecho dañoso es continuado, esto es, el daño se genera en el tiempo por una incesante y reiterada acción de la entidad demandada, el término de caducidad correrá, igualmente, de manera sucesiva, es decir, frente a cada actuación..."
(Subraya y Negrilla fuera de texto).

5.3. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328⁵ del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306⁶ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de marzo de 2007, rad. AG-250002325000200502206-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de febrero de 2006, rad. AG-76001-23-31-000-2002-04789-01, M. P. Germán Rodríguez Villamizar.

⁵ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

interpuesto por la apoderada de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

La apelante luego de hacer un breve recuento de los hechos en los que fundamenta la acción, trajo a colación pronunciamiento del Consejo de Estado e indicó que el término de caducidad de la acción debe estudiarse teniendo en cuenta la prolongación del daño hasta el día 17 de mayo de 2016.

Revisado el plenario, se observa que el día 20 de mayo de 2014⁷, la demandante Nasly Isabel Rivas sufrió accidente de tránsito cuando viajaba como acompañante a bordo de una motocicleta conducida por la señora Brigitte Robayo; que de conformidad con historia clínica⁸ de la Clínica Burgos el día 17 de mayo de 2016, se le realizó cirugía a la señora Nasly Isabel Rivas para retiro de material en la rodilla, en virtud de la cual se le dio incapacidad de 20 días, certificando en profesional de la salud que las lesiones de la paciente eran consecuencia de un accidente de tránsito; que solo hasta el día 18 de diciembre de 2017, los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos convocando al Municipio de Santiago de Cali con el fin de que les fueran reconocidos y pagados los perjuicios ocasionados con el accidente de tránsito sufrido por la señora Nasly Isabel Rivas el día 20 de mayo de 2014, sin embargo dicha solicitud fue resuelta de forma adversa mediante el auto No. 29 del 17 de enero de 2018⁹, por medio del cual se declaró que el asunto no era susceptible de conciliación por tratarse de un asunto en el cual había operado el fenómeno jurídico de caducidad, contra la decisión se interpuso recurso de reposición al cual se le dio trámite por medio de auto No. 70 del 31 de enero de 2018¹⁰, en el cual se resolvió no reponer la decisión;

Teniendo en cuenta los anteriores supuestos fácticos, para resolver se tiene que:

De conformidad con nuestra legislación vigente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta instituida para resolver controversias originadas en *actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo*, en donde estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa¹¹.

La Sala estima entonces que, teniendo en cuenta la jurisprudencia en cita, las circunstancias fácticas características del caso y de conformidad con las pretensiones de la demanda, se extrae que tal como lo concluyó el a-quo, el acaecimiento del hecho que generó el daño antijurídico, fue el **20 de mayo de 2014**, día en que se produjo el accidente de tránsito donde se vio involucrada la

⁶ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁷ Ver folios 30-31.

⁸ Ver folios 20-22.

⁹ Ver folios 14-15.

¹⁰ Ver folios 9-13.

¹¹ Artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)



motocicleta en la que viaja como acompañante la señora Nasly Isabel Rivas, fecha corroborada con el informe policial de accidente de tránsito 018015 y la lectura de los hechos narrados en la demanda.

Quiere decir ello, que no puede contabilizarse la caducidad como lo pretende la apoderada judicial de los demandantes en su recurso de apelación, al señalar que, si bien el hecho generador del daño acaeció el día 20 de mayo de 2014, los daños se vieron prolongados en el tiempo hasta el día 17 de mayo de 2016, fecha en la cual se le realizó el último procedimiento médico a la señora Nasly Isabel Rivas conforme al diagnóstico de ruptura de ligamentos a nivel de tobillo y pie, pues como se estableció en precedencia, los efectos en el tiempo del hecho dañoso no cambian la forma de contabilizar el término previsto en la norma para ejercer la acción de reparación directa incoada en el presente caso, toda vez que de hacerlo se le estaría dando erróneamente al daño el carácter de continuado, cuando el en sub lite nos encontramos frente a un daño inmediato según pronunciamiento del H. Consejo de Estado en providencia del 18 de octubre de 2007¹², donde se indicó la diferencia entre el daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto sucesivo:

“...En desarrollo de esto, la doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato; y (2) daño continuado o de tracto sucesivo; por el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el momento en que se produce. A título de ejemplo puede citarse la muerte que se le causa a un ser humano, con ocasión de un comportamiento administrativo. (...)

En lo que respecta, al (2) daño continuado o de tracto sucesivo, se entiende por él, aquél que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua o intermitente. Se insiste, la prolongación en el tiempo no se predica de los efectos de éste o si se quiere de los perjuicios causados, sino del daño como tal. La doctrina lo ejemplifica comúnmente en relación con conductas omisivas...”

Por lo tanto, le asiste razón al juez de primera instancia al manifestar que en el presente caso el término de caducidad debe comenzar a contabilizarse a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho dañoso que en este caso ocurrió el día 20 de mayo de 2014, cuando se produjo el accidente de tránsito donde resultó lesionada la señora Nasly Isabel Rivas y no a partir del día siguiente a la fecha en la cual presentó el último padecimiento de salud a causa de los hechos mencionados. No puede entonces la actora por desconocimiento de la norma o falta de asesoramiento de un profesional del derecho, escudarse en que los daños se han prolongado en el tiempo, cuando es evidente que el daño se dio de ipso facto, tal como consta en la historia clínica anexa visible a folios 30-44.

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 140, y 164 literal i) del CPACA, para la Sala no cabe duda que el término de la caducidad en el

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, providencia del 18 de octubre de 2007. Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG). Actor: GLORIA PATRICIA SEGURA QUINTERO Y OTROS. Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y OTROS. Referencia: Acción de Grupo.



presente proceso de contabilizarse a partir del día siguiente a la configuración del hecho dañoso, que fue el **20 de mayo de 2014**, por lo que el término de dos años para impetrar el medio de control se cuenta desde el **21 de mayo de 2014** hasta el **21 de mayo de 2016**, no obstante, la demanda fue presentada el **04 de mayo de 2018**, tal como consta en acta de reparto (folio 72), quiere decir que tal como lo dedujo el a quo, en el presente asunto ha operado la caducidad del medio de control al presentarse fuera del término legal.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 891 del veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019), proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, que rechazó la presente demanda, por caducidad.

SEGUNDO. - Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. _____).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los magistrados,

JHON ERICK CHAVES BRAVO

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
(101) IMPEDIMENTO LEGAL

Vbno. Secretario
ngg



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Doctor

JHON ERICK CHAVES BRAVO

Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle
Ciudad

RADICACIÓN No. 76001-33-33-021-2019-00187-01
ACCIONANTE: NASLY ISABEL RIVAS Y OTROS
ACCIONADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ASUNTO: IMPEDIMENTO

Cordial saludo:

Del estudio del presente asunto, me permito comunicar que me encuentro en presencia de un impedimento para conocer del proceso de la referencia, al estar incurso en la causal descritas en el artículo 130-4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La citada norma establece que los Magistrados deberán declararse impedidos, o serán recusables en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 141 del Código General del Proceso, y además en los siguientes eventos:

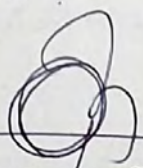
"(...) 4.- Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados" (Negrilla fuera de texto).

Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad accionada es el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, de modo que el suscrito Magistrado observa una causal de impedimento para conocer del asunto en referencia, al tener mi señora esposa, la doctora **JENY PAOLA MONTERO JIMENEZ**, un vínculo contractual como asesora jurídica de dicho ente territorial, causal que se

encuentra descrita en el numeral 4° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De esta manera, con el fin de garantizar una mayor imparcialidad y objetividad en el proceso de la referencia, y en acatamiento del numeral 3° del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pongo en conocimiento de su Honorable Despacho el impedimento que me asiste.

Atentamente,



RONALD OTTO CEDENO BLUME
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO No. 76001-33-33-021- 2019-00187-01
DEMANDANTE: NASLY ISABEL RIVAS Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (V)
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V), tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Decide la Sala sobre la legalidad del impedimento propuesto por el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, para conocer sobre el asunto de la referencia en contra del municipio de Santiago de Cali, quien manifestó encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 4° del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

La señora Nasly Isabel Rivas y otros interpuso demanda en ejercicio del medio de control de Reparación Directa en contra del Municipio de Santiago de Cali.

IMPEDIMENTO PROPUESTO

Encontrándose el expediente para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, manifestó estar impedido para conocer del mismo, considerando que se encuentra incurso en la causal señalada en el numeral 4° del artículo 130 del CPACA, y para ello argumentó lo siguiente:

"Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad accionada es el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de modo que el suscrito Magistrado observa una causal de impedimento para conocer del asunto en referencia, al tener mi señora esposa, la doctora JENY PAOLA MONTERO JIMENEZ, un vínculo contractual como asesora jurídica de dicho ente territorial, causal que se encuentra descrita en el numeral 4° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

CONSIDERACIONES:

El impedimento y la recusación han sido concebidos como instrumentos idóneos establecidos por el legislador para hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o del funcionario judicial en la toma de decisiones. Uno y otra son figuras legales que permiten observar la transparencia dentro del proceso judicial y que autorizan a los funcionarios judiciales a alejarse del conocimiento de este. Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la

función jurisdiccional que le corresponde al Juez, y como tal, están debidamente delimitadas por el legislador y no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes, por cuanto, la escogencia de quien decide no es discrecional.

Para que se configuren debe existir un "interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial." Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que comprometan su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso. La imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, están orientadas a garantizar que las actuaciones se ajusten a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad, sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública, artículo 209 de la Constitución Política.

Para resolver, se debe tener en cuenta en cuanto al trámite y competencia de los impedimentos propuestos por los Magistrados, el numeral 3º del artículo 131 de CPACA establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 131. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se efectúe el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez."

En consecuencia, se procederá a resolver sobre la legalidad del impedimento manifestado por el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, de la siguiente forma:

Como se anotó, el prenombrado Magistrado considera encontrarse en la causal de impedimento descrita en el numeral 4º del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011-CPACA-, norma que es del siguiente tenor:

"Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

(...)

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados."

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume informa que su esposa la doctora Jeny Paola Montenegro Jiménez, tiene un vínculo contractual con el Municipio de Santiago de Cali, como asesora jurídica de ese ente territorial, se concluye que tal situación se enmarca en la causal invocada, establecida en el numeral 4º del artículo 130 del CPACA, como quiera

que dicha entidad es el sujeto pasivo de las acciones anteriormente descritas, razón por la cual, se declarará fundado el referido impedimento.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión,

RESUELVE

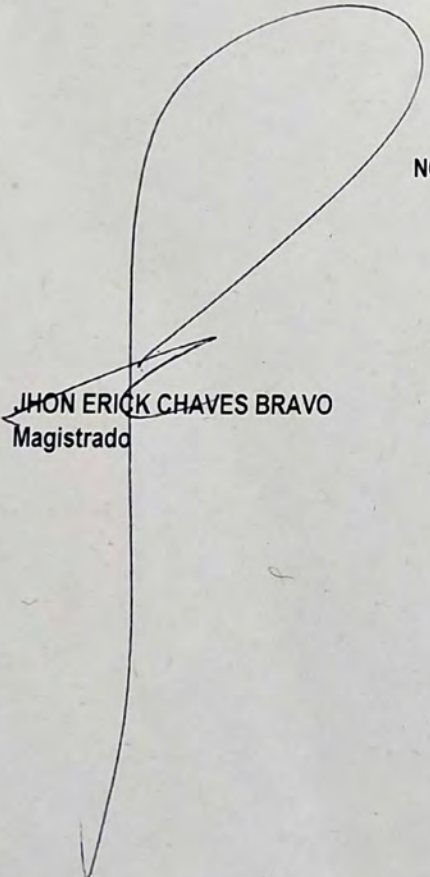
PRIMERO.- Declarar fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume para conocer de la presente proceso, de conformidad con lo argumentado en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO.- Declarar separado del presente asunto al Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume

TERCERO.- Comunicar por la Secretaria del Tribunal lo aquí decidido, al Ronald Otto Cedeño Blume

Providencia discutida y aprobada en Sala de Decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado



FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ
Magistrado